

GUINEA ECUATORIAL

(NIVEL 3)

Guinea Ecuatorial es principalmente un destino para niños sometidos a tráfico de personas, específicamente en condiciones de trabajo forzoso y posiblemente explotación sexual a nivel comercial. Se piensa que los menores son reclutados y transportados desde países vecinos, principalmente Nigeria, Benín, Camerún y Gabón y obligados a trabajar en servidumbre doméstica, mercados, venta ambulante, y otras formas de trabajo forzoso como transportar agua y lavar ropa. Se cree que la mayoría de las víctimas son explotadas en Malabo y Bata, donde una creciente industria petrolífera está creando demanda laboral barata y explotación sexual comercial. Mujeres de Camerún, Benín otros países vecinos y China pueden estar siendo reclutadas para trabajar en Guinea Ecuatorial y luego obligadas a realizar trabajos forzosos u obligadas a prostituirse.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial no cumple íntegramente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico por lo que ha sido clasificado en el grupo 2 durante los últimos cuatro años consecutivos. Por eso, de acuerdo con la sección 107 de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas del Tráfico de 2008, se considera que Guinea Ecuatorial no está haciendo esfuerzos significantes para cumplir con los estándares mínimos y se la clasifica en el nivel 3. A pesar de una limitada aplicación de la ley sobre sospechosos traficantes y contrabandistas de personas, incluyendo funcionarios públicos cómplices, el gobierno no ha hecho esfuerzos tangibles para proveer a las víctimas del tráfico de los servicios de protección dictados en su ley anti-tráfico de 2004. Los orfanatos operados por la Iglesia continúan ofreciendo todos los servicios para las víctimas de tráfico en el país sin apoyo o financiación del Gobierno.

El gobierno deporta inmigrantes ilegales de manera rutinaria sin intentar establecer si estos son víctimas de tráfico u ofrecerles servicios de asistencia. Los esfuerzos en materia de prevención han decrecido ya que el gobierno no ha lanzado ninguna campaña de concienciación pública y su comisión interministerial sobre tráfico humano desarrollo, pocas, si alguna acción. La respuesta del Gobierno al tráfico de personas ha sido inadecuada, particularmente si se compara con los sustanciales recursos financieros de este gobierno.

Recomendaciones para Guinea Ecuatorial: Incrementar el uso de la ley anti-tráfico del 2004 del país para procesar y condenar a contrabandistas y sus cómplices; desarrollar procedimientos formales para identificar víctimas de tráfico entre los menores trabajadores, inmigrantes ilegales y mujeres y niñas ejerciendo la prostitución; dedicar fondos para albergar y proteger a las víctimas de tráfico y

desarrollar un sistema formal para recomendar a las víctimas tales cuidados; formar a oficiales de la ley y a trabajadores sociales en los procedimientos de identificación y recomendación; concluir la deportación sumaria de mujeres y niños del territorio guineano sin antes corroborar su situación y, si fuese apropiado, facilitarles cuidados y una segura repatriación voluntaria; estudiar el alcance del problema del tráfico humano; y lanzar una campaña nacional de concienciación pública en contra del tráfico de personas.

ENJUICIAMIENTO

El gobierno de Guinea Ecuatorial mostro gestos modestos en materia de aplicación de la ley durante el periodo de este estudio. La “Ley Sobre Contrabando de Inmigrantes y Trafico de Personas” del 2004 prohíbe todas las formas de tráfico y prescribe penas de 10 a 15 años de prisión, castigos que son suficientemente severos en sí. Durante el periodo de este estudio, el gobierno utilizo esta ley para enjuiciar y condenar en por lo menos una ocasión a pesar de que parecía que el caso no tenía mucho que ver con tráfico de personas. El caso trataba de siete adultos- de los cuales algunos llevaban identificación de Mali y Burkina Faso- que fueron encontrados muertos en Bata. En Junio del 2010 la Corte Civil Superior de Bata condeno a un miembro de las fuerzas armadas, a un contrabandista Mali, y a su conductor por traficar con personas, sentenciándoles a una pena de 15 años en prisión una multa de 33, 680 dólares. El oficial de las fuerzas armadas y un complice se fugaron por lo que fueron juzgados en ausencia, pasando a ser prófugos; el tercer imputados está cumpliendo su pena en prisión.

PROTECCION

El Gobierno de Guinea Ecuatorial no ha podido demostrar medidas efectivas para proteger a las víctimas de tráfico durante el periodo del informe. A pesar de que la ley anti-trafico del 2004 obliga al gobierno a prestar asistencia legal, atención médica y psicológica, asesoramiento, alojamiento, alimentos, acceso a la educación, formación y oportunidades de empleo a las víctimas de trafico el gobierno no ha provisto ninguno de estos servicios de protección. La proposición hecha en el 2009 por el Ministerio de Asuntos Sociales para el establecimiento de un Fondo de Desarrollo Social para la creación de una red de albergues para mujeres y niños, incluyendo menores víctimas del tráfico de personas sigue sin ser financiado. La administración de cuidados a niños ecuatoguineanos víctimas de tráfico ilegal sigue siendo llevada a cabo por orfanatos de la Iglesia; menores extranjeros son

deportados sumariamente. No hay albergues ni ningún otro tipo de servicios de protección en Guinea Ecuatorial para adultos que son víctimas de tráfico de personas. Las autoridades legales no emplean procedimientos para identificar a las víctimas de este tráfico como tampoco hacen esfuerzos- de manera sistemática o ad hoc- para recomendar a las víctimas organización que proporcionan cuidados a corto y largo plazo. La ausencia de un método de identificación proactivo de víctimas repercutió en la habilidad del gobierno para ofrecer cuidados o asistencia a los extranjeros víctimas de tráfico de personas.; el gobierno detuvo a extranjeros, incluyendo posibles víctimas de tráfico en comisaría de policía por periodos de varios días o incluso meses, la mayoría de las veces sin ni siquiera notificar a las embajadas de estas víctimas de su detención o deportación. La gran mayoría de estos detenidos suelen ser hombres jóvenes aunque también mujeres y niños suelen ser detenidos y deportados. El gobierno no concede a los a las víctimas de tráfico ilegal status de residencia permanente o temporal ni ningún otro consuelo frente a la deportación. No parece que los oficiales multen a las víctimas, pero frecuentemente confiscan su dinero y posesiones.

PREVENCION

El Gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial redujo sus esfuerzos en la prevención de tráfico de personas durante el periodo estudiado. No continuo su previa financiación ni tampoco lanzo ninguna campaña anti-trafico de carácter infamativo o educacional para el público en general. La efectividad de la Comisión Interministerial contra el Tráfico de Personas, constituida desde la Oficina del Primer Ministro y dirigida por el Ministro de Justicia, esta limita por la ausencia de infraestructura administrativa en el país, y no llego a reunirse en todo el año. El Plan de Acción Nacional, creado después de la adopción de la ley de 2004 no ha llegado a implementarse y ha expirado. En Febrero del 2010 el gobierno consulto con UNICEF y el PNUD la revisión de este plan para incluir un estudio inicial de la magnitud del tráfico de menores y empezó la construcción de un albergue piloto en Malabo, pero no llego a finalizar o implementar el plan. En Marzo de 2010, el gobierno creó el Centro Nacional para la Emisión de Documentos Oficiales y en Octubre de 2010 atribuyo a esta agencia la tarea de actualizar todos los documentos nacionales y los carnets de extranjeros como parte de los esfuerzos gubernamentales por regular la inmigración. En 2010, el Ministerio de Trabajo condujo numerosas inspecciones laborales para verificar la adherencia con las leyes laborales en materia de paga, beneficios, y condiciones de trabajo. Cuando se encontraron violaciones el gobierno exigió que se corrigiesen los problemas, pagasen multas e indemnizaciones al empleado si fuese necesario. El Gobierno no

tomo ninguna medida apreciable para rebajar la demanda de actos sexuales comerciales durante el año.